



La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)

Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

La adaptación en los criterios de reparación a víctimas realizada por el Consejo de Estado, en los casos de responsabilidad del Estado por hechos considerados internacionalmente ilícitos¹.

David Felipe Amaya Díaz
Universidad Católica de Colombia

Resumen

La contribución presentada en este artículo de reflexión tuvo como propósito analizar la adaptación de las medidas de reparación a víctimas dispuestas por el Consejo de Estado en Colombia frente a los daños causados por acciones u omisiones consideradas como hechos internacionalmente ilícitos. Lo anterior desde la utilización del método deductivo, teniendo en cuenta que se parte desde la generalidad del concepto de responsabilidad del Estado, para luego llegar a los temas específicos que son los criterios de reparación a las víctimas. Para cumplir con este objetivo se precisaron en primer lugar los conceptos sobre responsabilidad del Estado y lo que se reconoce como un hecho internacionalmente ilícito, se determinaron los criterios de reparación tenidos en cuenta tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también por el Consejo de Estado colombiano y se procedió a realizar una comparación de las mismas junto con la evolución conceptual que ha adoptado el Consejo de Estado en sus sentencias y una descripción de la forma en que han empezado a incorporarse en el derecho interno los parámetros en materia de reparación de daños materiales e inmateriales. Se concluyó que el Consejo de Estado ha venido realizando un

¹Este Trabajo de Grado hace parte de la actividad resultante del proyecto de investigación: “Desafíos Contemporáneos para la protección de Derechos Humanos en escenarios de posconflicto desde enfoques interdisciplinarios”, que forma parte de la línea de investigación: “Fundamentación e implementación de los Derechos Humanos” del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia”, reconocido y categorizado en (A1) por COLCIENCIAS registrado con el código COL0120899, vinculado al Centro de Investigaciones Socio jurídicas (CISJUC), adscrito y financiado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Dirigido por Fernanda Navas-Camargo, Docente Investigadora del Grupo de Investigación: “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” de la Universidad Católica de Colombia. Contacto: jfnavas@ucatolica.edu.co

² Estudiante de Derecho con materias culminadas, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, identificado con código estudiantil N° 2110157. Correo electrónico: dfamaya57@ucatolica.edu.co

análisis acucioso de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos de responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos y ha venido incorporando en la jurisdicción interna estos parámetros logrando una adaptación en el juzgamiento interno de estos casos, a lo dispuesto en el sistema interamericano de Derechos Humanos. Resulta pertinente analizar la estructura de la responsabilidad del Estado en los casos de graves violaciones a los Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional y determinar si la normatividad interna se ha ajustado a lo dispuesto en el derecho internacional respecto a los criterios de reparación integral del daño.

Palabras clave: Responsabilidad Del Estado, Daño Antijurídico, Derechos Humanos, Responsabilidad Internacional, Bloque De Constitucionalidad, Reparación

The adaptation in the criteria of reparation of the victims by the Council of State, in cases of responsibility of the State for facts considered internationally illicit

Abstract

The contribution presented in this article of reflection had the purpose of analyzing the adaptation of the measures of reparation to victims ordered by the Council of State in Colombia for damages caused by actions or omissions considered as internationally wrongful acts. The above from the use of the deductive method, taking into account that it starts from the generality of the concept of responsibility of the State, to then come to the specific issues that are the criteria of reparation to victims. In order to fulfill this objective, the concepts of State responsibility and what is recognized as an internationally wrongful act were first identified, the criteria for reparation taken into account by both the Inter-American Court of Human Rights and the Council of Human Rights were determined. Colombian State and we proceeded to make a comparison of them, we explored the conceptual evolution adopted by the State Council in its judgments and described how the parameters for the reparation of human rights have begun to be incorporated into domestic law. Material and immaterial damages. It was concluded that the State Council has been conducting a thorough analysis of the judgments issued by the Inter-American Court of Human Rights in cases of State

responsibility for internationally wrongful acts and has been incorporating these parameters in the domestic jurisdiction, achieving an adaptation in the trial. Of these cases, to the provisions of the Inter-American Human Rights System. It is pertinent to analyze the structure of State responsibility in cases of serious human rights violations at the national and international levels and to determine whether the internal regulations have been adjusted to the provisions of international law regarding the criteria for integral reparation of the human rights hurt.

Key words: State Responsibility, Unlawful Damage, Human Rights, International Responsibility, Constitutionality Block, Reparation.

Sumario

Introducción. 1. Responsabilidad del Estado en Colombia. 1.1 Daño Antijurídico en la Constitución de 1991. 1.2 Responsabilidad Subjetiva. 1.1 Responsabilidad Objetiva. 2. Responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. 2.1 Elementos constitutivos del hecho internacionalmente ilícito. 3. Revisión de casos de condena a Estados por la Comisión de hechos internacionalmente ilícitos. 3.1 Caso Masacre de Mapiripan Vs. Colombia. 3.2 Caso Masacre Pueblo bello Vs. Colombia. 4. Reparaciones en sede la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 5.1 Sentencias Consejo de Estado sobre responsabilidad del Estado en casos de graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario. 5.1.1 Sentencia Exp. 6986 de junio 5 de 1992, Caso Londoño Arango. 5.1.2 Sentencia Exp. 10138 de abril 10 de 1997, Caso Orejarena Parra. 5.1.3 Sentencia Exp. 12623 de enero 28 de 1999, Caso Beltrán Puentes. 5.1.4 Sentencia Exp. 44333 de julio 9 de 2014, Caso Vergara Villalba y otros. 5.1.5 Sentencia de Unificación jurisprudencial de agosto 28 de 2014, Exp. 26.251. Conclusiones. Referencias.

Introducción

Los derechos que los Estados consagran en su Constitución están relacionados con fundamentos valorativos. Así entonces, se considera que la vida, la dignidad humana, la libertad, la libre expresión; son los cimientos del derecho constitucional moderno. La garantía de todos los derechos debe entenderse en conjunto, ninguno es más importante que otro, ya que son equivalentes entre sí.

De igual manera la suscripción de tratados internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por parte de los Estados, les obliga a garantizar lo acordado en virtud del principio *Pacta Sunt Servanda*. Sin embargo, algunos incurren en fallas u omisiones que van en contravía de diferentes normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos, casos en los cuales el Estado deberá reparar integralmente a las víctimas, de acuerdo a lo dispuesto por el ordenamiento interno. Pero, cuando la justicia interna se vuelve inoperante la jurisdicción internacional interviene para condenar al Estado por los hechos sucedidos.

En Colombia, con el fin de reparar los daños causados por acciones u omisiones del Estado, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en su artículo 90 desarrolla una norma que contiene una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado con fundamento en la teoría del daño antijurídico (González, 2012). El cual se apoya en la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos y en la función del Estado de garantizar los mismos. Se considera entonces deber de estos Estados acoger los parámetros sobre reparación integral que se den en los sistemas regionales de protección de Derechos Humanos.

³El artículo 26 de la Convención de Viena consagra el principio *Pacta Sunt Servanda*: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe". El principio *Pacta Sunt Servanda* es una regla fundamental de derecho internacional, reconocida en las Cartas de la ONU, de la OEA, e instrumentos internacionales, así como por la doctrina y la jurisprudencia internacionales.

Lo anterior, se realiza mediante la figura del bloque de constitucionalidad que se ha definido jurisprudencialmente como la unidad jurídica integrada por normas y principios que no obstante no aparecer formalmente en la Constitución Política, se utilizan como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, ya que han sido integrados a la Constitución, por diversas vías dispuestas en la propia Constitución (Corte Constitucional, Sentencia C-067 de 2003). Por lo tanto, en la medida que el Estado ratifique tratados internacionales, aunque el texto de la Constitución Política no disponga de manera expresa las obligaciones impuestas por dichos tratados, estas se entenderán integradas al ordenamiento jurídico interno mediante la figura del bloque de constitucionalidad.

Resulta necesario identificar los presupuestos de la Responsabilidad del Estado en el ámbito nacional e internacional, para identificar si se ha realizado una adaptación adecuada de los criterios de reparación integral del daño, de acuerdo a las disposiciones de derecho internacional.

De lo anteriormente expuesto, surge la pregunta de investigación que se planteó para el desarrollo del presente artículo: ¿Se han acogido los criterios de derecho internacional por el Consejo de Estado de Colombia para reparar a las víctimas por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos?

Este artículo de reflexión tiene como objetivo general analizar la estructura de la responsabilidad del Estado en caso de que se vulneran normas pertenecientes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos desde la óptica de la jurisdicción interna y la jurisdicción internacional, a partir de la utilización del método deductivo, teniendo en cuenta que se parte desde la generalidad del concepto de responsabilidad del Estado, hasta llegar a los criterios de reparación para las víctimas.

1. Responsabilidad del Estado en Colombia

El concepto de responsabilidad estatal se originó en Francia con el denominado Fallo Blanco en 1873 del Tribunal de Conflictos Francés que consagro por primera vez la Responsabilidad del Estado. En ese momento, no existía un desarrollo legal ni expreso para determinar la Responsabilidad del Estado porque el Tribunal se basó en la teoría del servicio público que le sirvió para predicar el deber del Estado de actuar de manera eficiente (Nader Orfale, 2016).

Ahora bien, en el caso de la Responsabilidad del Estado colombiano, la Constitución Política de 1886, le otorgo dicha obligación a la Corte Suprema de Justicia, y posteriormente al Consejo de Estado. Por esta razón, surgieron diferentes teorías en cuanto a la esencia de la responsabilidad extracontractual del estado, ya que cada corporación manejo sus propias teorías y sus argumentos.

Tal y como lo expresa la Corte Constitucional, en Colombia la responsabilidad patrimonial del Estado surge con la Constitución Política de 1991 que la consagro expresamente. Se había dado un desarrollo anterior con la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes las cuales tomaron conceptos de responsabilidad patrimonial establecidas en el Código Civil y que se ocupan de este tema en el derecho privado. La Corte Suprema de Justicia en una Sentencia de 1986, reconoce que las entidades del Estado deben reparar de manera integral los daños causados a los ciudadanos. Así surgen ciertos criterios para determinar modalidades concretas de responsabilidad (Sentencia C- 644/11 de 2011).

Respecto a la inclusión de la cláusula general de Responsabilidad en la Constitución Política de Colombia de 1991:

La norma constitucional contiene una regla general de responsabilidad patrimonial del Estado con fundamento en el daño antijurídico que instituye la obligación de reparar el perjuicio prescindiendo de todo tipo de ilicitud o culpa en la ejecución del hecho y apoyándose en la protección y garantía de los derechos de los administrados y comprende no sólo la responsabilidad sino también el sistema de responsabilidad precontractual y la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter contractual.(González, 2012, p. 14).

Como se indica anteriormente la Constitución Política de 1991 consagró la responsabilidad del Estado desde una cláusula única basada en la noción de daño antijurídico, que se explicara a continuación:

1.1 Daño antijurídico en la Constitución de 1991:

Como lo indican Agudelo & Calderón (2016), el artículo 90 de la Carta Política expresa que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables cuando estos sean causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Dicha disposición no excluye ni contempla excepción alguna, en razón a que ninguna entidad del Estado está exenta de responder patrimonialmente cuando cause un daño antijurídico.

Se tiene entonces que el daño antijurídico se ha definido por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional (1996) como el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La acepción anterior del daño antijurídico es el fundamento del deber de reparación del Estado que armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho.

Consecuente con lo anterior debe resaltarse que la teoría del daño antijurídico es el eje o epicentro de la fundamentación jurídica de la Responsabilidad del Estado. Así entonces, el daño antijurídico es el régimen de responsabilidad del Estado, y de acuerdo al caso en concreto varían los títulos de imputación que se refieren a la razón de naturaleza jurídica que permite o autoriza atribuir o asignar el daño al Estado (Gil Botero, 2017).

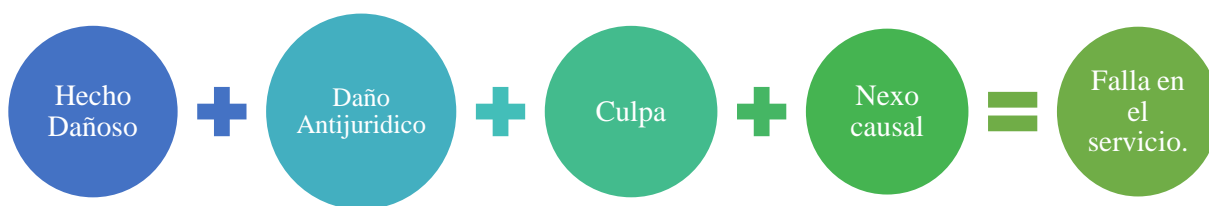
Ahora bien, frente a los títulos de imputación se tienen unos de carácter subjetivo y otros de carácter objetivo, lo que será analizado a continuación:

1.2 Responsabilidad subjetiva:

La responsabilidad subjetiva está sustentada en el concepto “culpa” o falla en el servicio. Como afirma Güecha (2008) la teoría clásica francesa de responsabilidad del Estado asegura que esta clase de responsabilidad tiene fundamento en la obligación que tiene la administración de indemnizar los perjuicios causados por la actuación de las entidades públicas, en cuanto que en la misma se evidencia irregularidad o culpa.

En razón de lo anterior puede inferirse que en esta clase de responsabilidad es un elemento indispensable la culpa de la entidad o el agente, como se observara en la siguiente grafica que describe los elementos de la responsabilidad subjetiva por falla en el servicio:

Figura 1. Elementos de la falla en el servicio



Fuente: Elaboración Propia.

Como se indicó anteriormente y se puede observar en la figura 1 el título de imputación en responsabilidad subjetiva es la falla en el servicio. Dicho título de imputación tiene unas características específicas, la primera de ellas es la prestación anormal del servicio, la segunda es la existencia de una conducta humana, la tercera la existencia de una culpa anónima, y la ultima el análisis de los hechos a la luz de la realidad concreta (Molina, 2015).

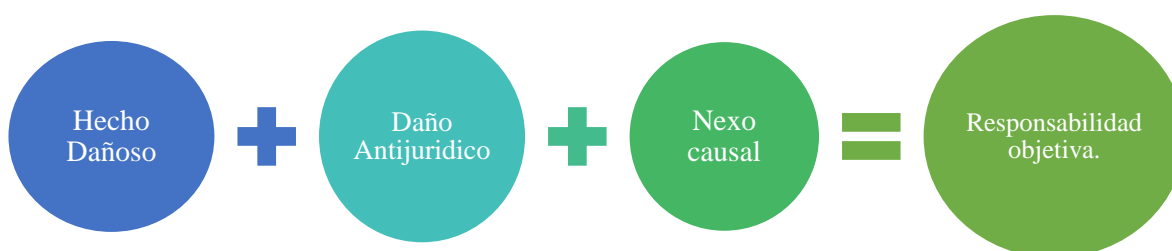
Analizado el régimen de responsabilidad subjetivo, es necesario analizar la diferencia que tiene este con el régimen objetivo, de acuerdo a lo que se evidencia subsiguientemente.

1.3 Responsabilidad Objetiva:

Por su parte la responsabilidad objetiva no requiere del elemento de la culpa para su imputación ya que como lo afirma Ruiz (2016) este tipo de responsabilidad recurre a la teoría del daño como fundamento de la responsabilidad del estado, de esta forma no cobra relevancia la culpabilidad, si no la ocurrencia del hecho que genero el daño.

Por consiguiente, cuando se habla de responsabilidad objetiva el daño antijurídico en la es ocasionado durante la ejecución de actividades legítimas del Estado, en la cual resultan quebrantadas las cargas públicas. Lo anterior resulta causando un perjuicio anormal. Es decir, se impone una carga a una persona que no tiene el deber jurídico de soportar (Jiménez, 2016).

Figura 2. Elementos de la responsabilidad objetiva



Fuente: Elaboración Propia

Como se puede observar los títulos de imputación de responsabilidad objetiva prescinden del elemento de la culpa, que en este caso no es necesario, ya que esta clase de responsabilidad se predica de una actividad legítima del Estado como se indicó anteriormente.

Así mismo, dentro de los títulos de imputación en materia de Responsabilidad Objetiva están el Riesgo Excepcional, el Daño especial, entre otros que contemplan acciones concretas como la expropiación por causa de guerra.

2. Responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos

Como lo indica Aizenstatd (2012) el derecho internacional actualmente permite identificar una clase de responsabilidad internacional de un Estado generada por hechos ilícitos y otra clase de responsabilidad que, sin que exista un hecho ilícito, surge de la realización de actividades lícitas, pero que terminan produciendo daños a terceros.

Dicho lo anterior, se debe precisar que el objeto de estudio del presente artículo de investigación se centra en la responsabilidad internacional del Estado por hechos considerados ilícitos. El hecho internacionalmente ilícito se define como aquel hecho ilícito atribuible a un Estado. Dicho hecho constituye una violación o infracción del Derecho Internacional, y causa un daño a terceros o a la comunidad internacional en si misma (Sferrazza, 2017).

Así entonces, cuando los Estados incurren en algún tipo de falla u omisión que hace que se violen diferentes normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos, se predica la responsabilidad internacional del Estado y este deberá reparar integralmente a las víctimas, de acuerdo a los criterios internacionales sobre reparación integral del daño (Agudelo & León, 2017).

La regulación sobre este tema se dio mediante el proyecto de artículos sobre Responsabilidad Internacional del Estado fue realizado por varios relatores especiales de la Comisión de Derecho Internacional (en adelante CDI). Posteriormente en el año 2001. La Asamblea General, mediante su resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001, tomó nota de los Artículos, cuyo texto figura en el anexo de esa resolución, y los señaló a la atención de los gobiernos, sin perjuicio de que pudiera luego aprobarse como texto de un tratado o de otro tipo de medida. Igualmente, en el año 2004, 2007 y 2010 se señalaron los artículos nuevamente en distintas resoluciones y se tienen en la actualidad como aprobados ya que han sido aplicados muy ampliamente en la práctica, incluso por la Corte Internacional de Justicia (Gallo, 2016).

Cabe resaltar, que este proyecto consta de 59 artículos y está dividido en cuatro partes, La primera hace referencia a la identificación de "El hecho internacionalmente ilícito del Estado", que comprende los capítulos relacionados con los principios generales, a la atribución de un comportamiento al Estado. La segunda parte, hace referencia al "Contenido de la responsabilidad internacional del Estado", que consta de tres capítulos: el de principios generales, el relativo a la reparación del perjuicio, así como el de las violaciones graves de obligaciones emanadas de normas imperativas de derecho internacional general. Y la tercera parte que se denomina "Modos de hacer efectiva la responsabilidad internacional del Estado",

que se divide en dos capítulos: el de invocación de la responsabilidad del Estado y el de las contra- medidas (Avalos, 2006).

Es necesario entonces observar una serie de aspectos inherentes a la responsabilidad del Estado en materia internacional para determinar cuándo se configura la misma por lo que dicho tema será abordado a continuación:

2.1 Elementos constitutivos del hecho internacionalmente ilícito:

Moyano & Ortiz (1994) señalan como elementos constitutivos del hecho internacionalmente ilícito un elemento subjetivo que es el comportamiento atribuible al Estado y un elemento objetivo que es que dicho comportamiento genere la violación de una obligación internacional del Estado, lo anterior de acuerdo a lo esbozado por los tribunales de derecho internacional.

De manera que para que pueda predicarse la existencia de un hecho internacionalmente ilícito, debe existir un comportamiento imputable al Estado propiamente, con el cual se incumpla una obligación internacional adquirida por el Estado en virtud de la ratificación de instrumentos internacionales.

Respecto del hecho ilícito internacional Cáceda (2012) afirma que la ilicitud de esta situación se divide en dos partes: la primera, referida a la violación del ordenamiento jurídico internacional (elemento objetivo); y la segunda, la lesión de un derecho subjetivo lesionado por un incumplimiento por acción u omisión del Estado que comporta el elemento subjetivo.

Siendo claro lo anterior, es imperioso continuar el estudio del tema identificando una serie de casos, donde puede observarse de manera concreta situaciones que dieron lugar a la declaración de responsabilidad del Estado en el derecho internacional.

3. Revisión de casos de condena a Estados por la Comisión de hechos internacionalmente ilícitos

Se hace necesario, con el fin de entender el contexto de la responsabilidad de los Estados por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos, realizar la revisión de algunos casos que

han sido abordados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta materia, tal como se verá a continuación:

3.1 Caso Caballero Delgado y Santana:

El 7 de febrero de 1989, en la vereda Guaduas, Municipio de San Alberto, Departamento de El Cesar, Colombia, Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana fueron capturados por una patrulla militar conformada por unidades del Ejército de Colombia, sin embargo cuando se emprendió su búsqueda en las bases militares no se dio razón de estas personas.

En este caso, quedo probada la responsabilidad de Colombia por la captura de carácter ilegal y la presunta muerte de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, le es imputable la violación del derecho a la libertad personal y del derecho a la vida de las personas mencionadas, garantizados por los artículos 7 y 4 de la Convención. Como lo indica Ahumada (2015) la importancia de este sentencia se basa en que si bien en algunas circunstancias se pueden presentar circunstancias que dificulten la investigación y juzgamiento de hechos delictivos que atenten contra los derechos de los individuos, en todos los escenarios el Estado debe garantizar plenamente los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos.

En Esta sentencia se ordena al Estado Colombiano investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables (Chacón, 2015) y adicionalmente a pagar una indemnización que asciende a 89.500,00 (ochenta y nueve mil quinientos dólares estadounidenses) o su equivalente en moneda nacional.

3.2 Caso de la masacre de Las Palmeras:

Este caso se origina por los sucesos ocurridos el 23 de enero de 1991 en Mocoa Putumayo, cuando por orden del Comandante Departamental de la Policía de Putumayo se llevó a cabo una operación armada donde participaron miembros de la policía y el ejército, en la localidad de Las Palmeras. En dicho operativo, el Ejército abrió fuego desde un helicóptero hiriendo al niño Enio Quinayas Molina, por otro lado la Policía detuvo en la escuela y en sus alrededores al seis personas más que fueron ejecutadas extrajudicialmente., ocultando la

evidencia posteriormente vistiendo con camuflados a las personas ejecutadas para presentarlas miembros de grupos subversivos muertos en un presunto enfrentamiento.

En el ámbito local, se abrió proceso disciplinario en contra de los implicados, realizado por el Comandante de la Policía Nacional de Putumayo se falló en cinco días y se absolvió a todos los que participaron en los hechos de la localidad de Las Palmeras. Asimismo, se iniciaron dos procesos contenciosos administrativos en los que se reconoció expresamente que las víctimas del operativo armado no pertenecían a ningún grupo armado y que el día de los hechos estaba realizando sus tareas habituales, sin embargo la investigación y el juzgamiento de estos crímenes no fue efectivo (De los Reyes & Aragón, 2003).

Por lo que se condenó al Estado a pagar indemnizaciones por estos hechos y además se le ordenó investigar, juzgar y emitir la respectiva sanción a los causantes de estos hechos.

3.3 Caso de la masacre de los diecinueve comerciantes:

En el año 1987, miembros de un grupo “paramilitar” que con el apoyo y autoría intelectual de oficiales del Ejército colombiano dio muerte a diecinueve comerciantes en el municipio de Puerto Boyacá, descuartizó sus cuerpos y los lanzó a las aguas del caño El Ermitaño, afluente del río Magdalena.

Se confirma en este caso, que el estado colombiano violó los derechos a la a la libertad personal, a la integridad personal y a la vida consagrados en los artículos 7, 5 y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así mismo violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que se ordenó el pago de indemnizaciones y además investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables (Chacón, 2015).

3.4 Caso Wilson Gutiérrez Soler:

El Señor Wilson Gutiérrez Soler fue privado de la libertad por agentes del Estado y sometido a una serie de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, consistentes en quemaduras en los órganos genitales y otras lesiones graves. Se logra comprobar mediante las pruebas

aportadas que el Estado colombiano no ha adoptado las medidas necesarias para determinar los responsables y proceder con su investigación y juzgamiento.

Así mismo, y teniendo en cuenta que el hecho fue ejecutado por miembros de la Fuerza Pública colombiana el Estado debe implementar cursos de formación de los servidores públicos de la jurisdicción penal militar y de la fuerza pública un programa dirigido al análisis de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.

3.5 Caso de la Masacre de Mapiripan:

El caso de la masacre de Mapiripan se presenta en el contexto del Conflicto Armado Interno no Internacional (en adelante CANI) que se sostuvo en Colombia por parte de diversos actores armados. Como lo indica Mejía (2007) en esta época se presentaron en Colombia diversas violaciones de derechos constitucionalmente protegidos y adicionalmente, el Estado una serie de deberes adquiridos en el marco de la ratificación de tratados internacionales.

Respecto de este caso Vivas & Toro (2016) han indicado que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se revisan las obligaciones de los Estados frente a la Convención para poder indicar si estos son sujeto de responsabilidad internacional dentro del modelo interamericano. Siendo así, luego de dos años de procedimientos ante la jurisdicción interna, el 6 de octubre de 1999 se presenta formalmente la denuncia ante la CIDH, y posteriormente fue remitido el caso a conocimiento de la Corte el 5 de septiembre de 2003.

Los hechos descritos en la sentencia de la Corte Interamericana sobre este caso consideran probada la incursión de grupos paramilitares en Mapiripan, Meta con apoyo del ejército nacional de Colombia. En los días que estos grupos armados permanecieron en este municipio se llevaron a cabo homicidios, desapariciones forzadas, abuso sexual, entre otras conductas delictivas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005).

Una vez llevado a cabo todo el proceso ante la Corte interamericana de Derechos Humanos y presentados lo alegatos de las partes, concluye esta autoridad que la investigación conducida por Colombia sobre la masacre en Mapiripan ocurrida entre el 15 y el 20 de julio de 1997 incumple los estándares de acceso a la justicia y protección judicial establecidos en la Convención Americana.

Dentro de este proceso se declara responsable al Estado colombiano por la violación de los derechos a la libertad personal, integridad personal y vida de las víctimas, que además resultan agravadas como consecuencia de las faltas al deber de protección y al deber de investigar los hechos, así como de la falta de mecanismos judiciales efectivos para dichos efectos y para sancionar a todos los responsables de la masacre de Mapiripan. De tal manera, el Tribunal declaró al Estado responsable de la violación de los artículos 8.1² y 25³ de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.

Este no fue el único caso que se presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado colombiano, ya que como se observa a continuación los hechos internacionalmente ilícitos en el marco del conflicto armado fueron varios, entre ellos la masacre de Pueblo Bello en Antioquia, que será explicada a continuación.

3.6 Caso masacre Pueblo Bello:

El caso de la masacre perpetrada en el municipio de Pueblo Bello en el departamento de Antioquia, tiene un contexto similar al de la masacre de Mapiripan en el Meta, teniendo en cuenta que los victimarios en este caso también fueron grupos paramilitares que operaban en la región.

Como lo indica Carvajal (2015) en el marco de este caso se presentó la desaparición forzada de 37 individuos y la ejecución de seis campesinos, en total 43 personas que pernoctaban en Pueblo Bello. La Corte Interamericana es enfática en indicar que este hecho se enmarca dentro de un acto de justicia privada a manos de los grupos paramilitares entonces liderados

⁴Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulado contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

⁵Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

por Fidel Castaño en el departamento de Córdoba, perpetrado con la aquiescencia de agentes del Estado.

En estos casos se identificó por parte de la Corte Interamericana de Derecho humanos el deficiente actuar de la fuerza pública y la inoperancia de la justicia para resolver este tipo de casos en un plazo razonable, de manera que pudiera haber una reparación integral de las víctimas de estos actos, que se enmarcan dentro de un hecho internacionalmente ilícito.

En este caso concreto, el Estado Colombiano violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal como también el derecho de los familiares de las personas desaparecidas y privadas de la vida, a las garantías judiciales y a la protección judicial, para garantizar el acceso a la justicia.

3.7 Caso masacre de Ituango:

Este caso se originó por los actos de omisión, aquiescencia y colaboración por parte de miembros de la Fuerza Pública apostados en el Municipio de Ituango con grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que perpetraron sucesivas incursiones armadas en ese Municipio asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión, despojando a otros de sus bienes y generando terror y desplazamiento.

En este sentido, como lo indica Chacón (2015):

La Corte concluyó que la medida de reparación relativa a la obligación de investigar los hechos se halla en proceso de cumplimiento y considera imprescindible que, en el plazo señalado en la parte resolutive de esta decisión, el Estado presente información actualizada, detallada y completa sobre la totalidad de las acciones emprendidas para el cumplimiento de esta obligación, los resultados obtenidos y copia de la documentación que le sirva de respaldo, de manera que la Corte pueda verificar que las investigaciones se están llevando a cabo con debida diligencia (p.53).

Se puede observar que de manera reiterada la Corte Interamericana ha condenado al Estado colombiano por la ineficiencia de las autoridades en la investigación y el juzgamiento de los responsables de los hechos mencionados, por lo cual ha sido concurrente que en la mayoría de casos se le ordene al Estado colombiano investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

3.8 Caso Masacre de la Rochela:

El 18 de enero de 1989 un grupo paramilitar con la cooperación de agentes estatales ejecutó extrajudicialmente a varias personas mientras cumplían una diligencia probatoria en su carácter de funcionarios de la administración de justicia en el corregimiento de `La Rochela, Departamento de Santander, Colombia. Lo relevante de este caso, es que a pesar de que las autoridades conocieron los hechos, no se iniciaron de manera diligente, y por lo tanto al momento en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció del caso, esté permanecía en parcial impunidad y la mayoría de los autores materiales e intelectuales, civiles y militares, no habían sido investigados y sancionados penalmente.

Como lo indicó Cuastumal (2013) los investigadores asesinados se encontraban investigando la desaparición de los comerciantes en el Departamento de Boyacá, en ese trayecto fueron detenidos por hombres armados que se hicieron pasar por miembros del grupo guerrillero de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia “FARC”, quienes previamente acordaron con el Ejército Nacional de Colombia que darían muerte a los investigadores judiciales.

En esta sentencia se condenó al Estado colombiano a la reparación de los daños materiales e inmateriales sufridos por las víctimas, así mismo establecieron unas medidas de satisfacción y no repetición que incluyen actividades de desagravio a la memoria de las víctimas, publicación de la sentencia, entre otros.

3.9 Caso Escué Zapata:

El 1 de febrero de 1988, en horas de la noche, agentes del Ejército colombiano entraron de manera violenta en la casa del señor Germán Escué, lo amarraron y sacaron de su casa a golpes. La Comisión señaló que luego de que se llevaran a la presunta víctima, su madre se dirigió a la vivienda de unos familiares y escuchó disparos. Tiempo después encontró su cuerpo sin vida en las inmediaciones de un caserío ubicado en el resguardo Jambaló.

El Estado colombiano fue condenado por caso al pago de las indemnizaciones correspondientes a los familiares de la víctima, adicional se le ordenó investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, crear un fondo de desarrollo comunitario en memoria de Germán Escué

Zapata y la toma de medidas efectivas garantizar la educación superior de Myriam Zapata Escué hija de la víctima.

3.10 Caso Valle Jaramillo y otros:

Este caso se abre en razón a los hechos acaecidos el 27 de febrero de 1998, cuando dos hombres armados ingresaron al despacho de Jesús María Valle Jaramillo en Medellín donde también se encontraban Carlos Fernando Jaramillo Correa y Nelly Valle Jaramillo, hermana de Jesús María quienes fueron amenazados. Jesús María Valle fue asesinado mediante dos disparos a la cabeza falleció instantáneamente. Transcurridos casi nueve años, se habían condenado a tres civiles, en ausencia, y no existen investigaciones judiciales orientadas a la determinación de responsabilidad alguna de agentes del Estado.

En este caso, se esgrimen importantes argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el plazo razonable, como se indica a continuación:

Ya entrando en las consideraciones de la Corte sobre la razonabilidad del plazo en los procesos penales, el Tribunal dejó sentado que el acceso a la justicia implica que la resolución de la controversia se haga en un tiempo razonable, puesto que las demoras prolongadas, en sí mismas pueden llegar a constituir la violación de las garantías judiciales de los involucrados. Observó que en el caso, desde la ocurrencia de los hechos, habían transcurrido más de 10 años sin que hubiesen concluido los procesos penales respectivos y que la razonabilidad en los plazos debe ser analizada en relación a la duración total del procedimiento que se desarrolla hasta el momento en que se dicta la sentencia definitiva (Trujillo, 2014).

En razón de lo anterior, se condenó al Estado y se le ordenó investigar y sancionar a todos los responsables, adicionalmente se debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en este caso.

3.11 Caso Manuel Cepeda Vargas:

Este caso hace referencia a la ejecución extrajudicial del entonces Senador Manuel Cepeda Vargas perpetrada el 9 de agosto de 1994 en la ciudad de Bogotá, así como a las alegadas faltas de debida diligencia en la investigación y sanción de todos los responsables, obstrucción de justicia y la falta de reparación adecuada a favor de los familiares.

Como lo indica Ramírez (2017) si bien en este caso se observó que la justicia interna colombiana había ordenado, mediante sentencia proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la reparación pecuniaria de los perjuicios de las víctimas. Se consideró que dicha reparación no cumplió con el deber convencional de reparar integralmente las violaciones sufridas por el propio senador ni otras violaciones constatadas en el juicio.

Vistos los casos anteriores, donde es notoria la condena al Estado Colombiano por la Comisión de hecho internacionalmente ilícitos, a continuación, se procederá a analizar los criterios de reparación que utiliza la CIDH para advertir si los mismos han sido acogidos por el Consejo de Estado.

4. Reparaciones en sede la Corte interamericana de Derechos Humanos.

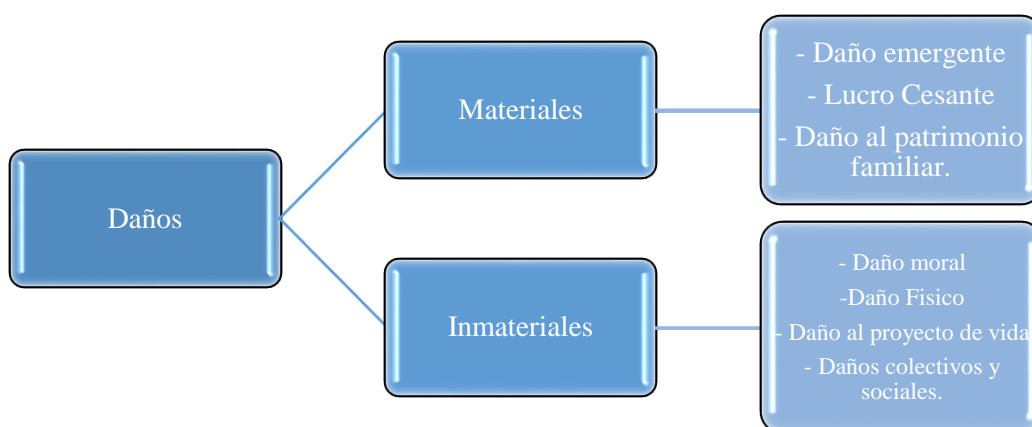
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006) en cuanto a las reparaciones a víctimas ha dispuesto que motivo de la responsabilidad internacional en que ha incurrido el Estado, nace para este una relación jurídica u obligación nueva que consiste en la obligación de reparar, distinta a la reparación que los familiares de la víctima pudieran obtener de otras personas naturales o jurídicas.

En ese sentido ha expresado esta corporación que, para establecer las medidas de reparación, se deben determinar con precisión los hechos de cada caso concreto, para de esta manera resarcir el daño que fue causado. Por lo cual se contemplan medidas de diversa índole.

Al respecto Calderón (2013) indica que la CIDH ha identificado que desde la perspectiva integral del ser humano los daños causados pueden generar afectaciones de categoría material e inmaterial. Dentro del carácter material se encuentra el daño emergente, el lucro cesante, entre otros; ahora bien, en la esfera inmaterial se encuentra los daños morales, psicológicos y al proyecto de vida colectiva y social.

La figura 3 que se muestra a continuación, da cuenta de algunas de las formas de reparación que han sido utilizadas por la CIDH en sus sentencias.

Figura 3. Clasificación de Daños realizada por la CIDH



Fuente: Elaboración Propia (2018).

Como se puede observar en la figura la 3, se han identificado de manera clara los daños causados en la esfera material e inmaterial en procura de ejercer una reparación integral a la víctima. Así mismo, se han identificado una serie de medidas de reparación de acuerdo a los daños ocasionados a la víctima.

En concordancia con lo anterior Rousset (2011) identifica que a través de la jurisprudencia emitida por la CIDH se pueden distinguir medidas de restitución que pretende devolver a la víctima a su estado anterior, de rehabilitación⁴ que busca reparar las afectaciones psicológicas

⁶ Medidas de rehabilitación fueron ordenadas por primera vez por la CIDH en el caso Barrios Altos VS Perú. Sentencia del 3 de diciembre de 2001.

o morales, de satisfacción que buscan reintegrar a las víctimas su dignidad humana, garantías de no repetición, indemnización compensatoria.

Desde lo anterior se puede colegir que el modo de reparar que ha sido abordado por la Corte en sus diferentes sentencias ha incorporado diversas perspectivas de acuerdo a los casos que se han presentado ante su jurisdicción. Por lo tanto, los avances que se han presentado en cuanto a las medidas de reparación, tienen en gran medida fundamento en las diversas vulneraciones de derechos que se han evidenciado por parte de los Estados. Como lo indica Bruno (2014) la CIDH ha considerado la importancia de atender a las necesidades concretas de las personas y de las condiciones concretas de los daños que ha sufrido y de las medidas que conllevaran a su reparación integral. Se ha evidenciado que la Corte actualmente tiene una vocación transformadora de la realidad de las sociedades de la región, buscando que se garantice la no repetición de los hechos.

5. Criterios de reparación asumidos por el Consejo de Estado en Colombia en casos de graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario.

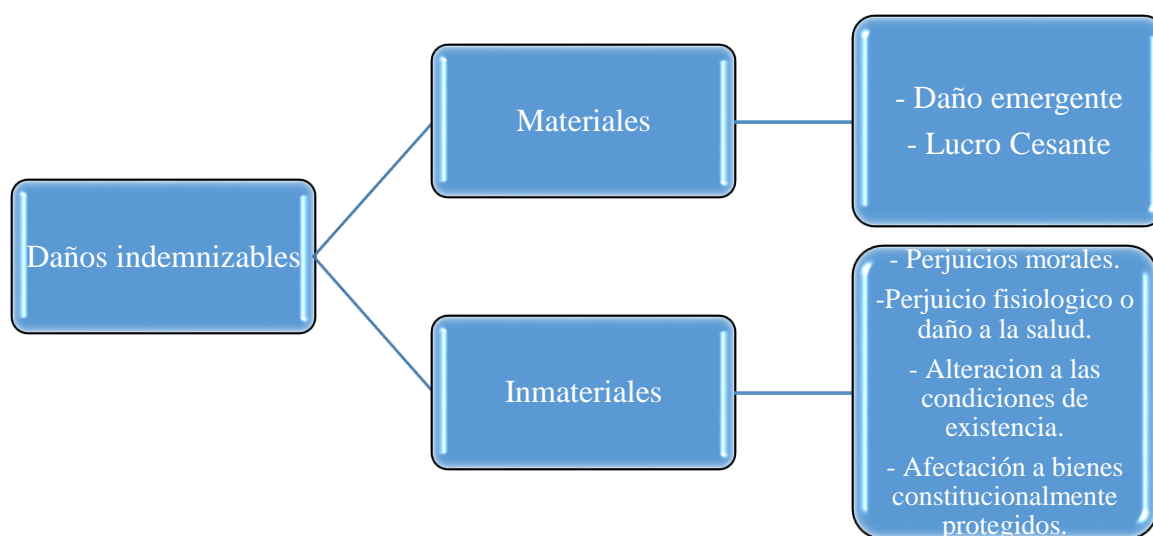
Como lo establece Tarazona (2016) los operadores jurídicos tienden a emplear los términos daño y perjuicio como si fuesen equivalentes, es decir, como si entre estos existiese una relación de sinonimia cuando en realidad son distintos. Por esta razón el Consejo de Estado ha precisado que el daño es toda lesión a un bien jurídicamente tutelado; y por su parte el perjuicio tiene relación con las consecuencias o efectos que ese daño o lesión produce en el patrimonio de la víctima.

Dicho lo anterior, el Consejo de Estado a través de su jurisprudencia⁷ ha considerado que existen dos clases de perjuicios. En primer lugar, se tienen los perjuicios materiales o económicos, y en segundo lugar los perjuicios inmateriales. Así mismo se ha indicado que cuando la reparación a las víctimas por los daños sufridos debe ser integral, por lo cual se deben indemnizar todos los perjuicios efectivamente sufridos y probados.

⁷ Ver sentencia Consejo de Estado Exp. 40.060 del 20 de octubre de 2014. C.P Enrique Gil Botero, Sentencia Exp. 31.170 del 28 de agosto de 2014. C.P: Enrique Gil Botero.

En ese contexto se observa una similitud en cuanto al criterio expresado por la CIDH, en cuanto a la clasificación de los daños sufridos por la víctima y los perjuicios que se deben indemnizar. En la figura 4 podemos observar los daños indemnizables expresados en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Figura 4. Clasificación de Daños según el Consejo de Estado



Fuente: Elaboración Propia (2018).

En relación con lo anterior, es preciso indicar que existen una serie de condiciones para que el daño sea indemnizable. En ese sentido Gil Botero (2017) asegura que en primer lugar el perjuicio tiene que ser cierto, lo que significa que sea real, en segundo lugar, el perjuicio tiene que ser personal, y en tercer lugar el perjuicio tiene que ser cuantificable, es decir que sea susceptible de medición o determinación, por regla general, en términos monetarios.

Cabe resaltar que el Consejo de Estado ha adoptado una serie de medidas en materia de reparación de perjuicios, reconociendo el principio de reparación integral de las víctimas tanto pecuniarias como no pecuniarias que permiten indicar que las decisiones tomadas en la

jurisprudencia de los últimos años del Consejo de Estado se han articulado los preceptos de reparación que ha señalado la CIDH.

Ahora bien, es necesario precisar que el Consejo de Estado ha contemplado la posibilidad de ampliar el tope las indemnizaciones por perjuicios inmateriales, teniendo en cuenta únicamente en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Dicha indemnización podrá superar los 100 Salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior teniendo en cuenta que el juez deberá motivar su decisión de manera correcta.

5.1 Sentencias Consejo de Estado sobre responsabilidad del Estado en casos de graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario:

En este punto se expondrán una serie de sentencias emitidas por el Consejo de Estado en Colombia, en casos donde se debate la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Lo anterior permitirá identificar la evolución que se ha presentado sobre los parámetros de reparación integral a víctimas.

5.1.1 Sentencia Exp. 6986 de junio 5 de 1992, Caso Londoño Arango:

En esta sentencia se analiza un caso de limpieza social llevado a cabo por autoridades que dejó como víctima a Javier de Jesús Londoño, después del análisis probatorio, se concluyó que la víctima había sido asesinada ya que las personas del pueblo donde residían consideraron que no era una persona de bien, y afectaría la convivencia en el pueblo.

Como lo indica el Consejo de Estado (2012) en su recopilación de sentencias sobre reparaciones a graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional, en este caso concreto debe indicarse lo siguiente:

Nadie en Colombia se puede arrogar la facultad de definir, con fines de exterminio o de perdón, quién es útil, bueno y merece seguir con vida y quién es

malo, inútil, “desechable” y debe morir. Nadie y mucho menos la autoridad. Cuando la autoridad asume ese papel, pierde su basamento moral y legal (p.115).

Ahora bien en cuanto el sentido de la Decisión, el Consejo de Estado conociendo del caso por recurso de apelación, decide revocar la decisión de primera instancia, que había negado las pretensiones de la demanda y ordenar a la Policía Nacional a reconocer los perjuicios morales a favor de los padres de la víctima.

Como se puede observar para 1992, se reconocía únicamente como reparación en casos de graves violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario perjuicios inmateriales, en este caso morales a favor de los familiares de la víctima, no se consideraban para este momento otras medidas que garantizaran una reparación integral. Con el paso del tiempo, se espera una evolución.

5.1.2 Sentencia Exp. 10138 de abril 10 de 1997, Caso Orejarena Parra:

En esta sentencia se analiza la responsabilidad del Cuerpo de Inteligencia Antiextorsión y Secuestro, adscritos al Batallón de la Quinta Brigada del Ejército nacional en el asesinato de Jesús Orejarena Parra y dos personas más, cuando estos se transportaban en su vehículo en la ciudad de Bucaramanga.

Respecto de este caso el Consejo de Estado (2012) en su documento compilatorio sobre la evolución de la responsabilidad en casos de graves violaciones de derechos humanos se ha dicho lo siguiente:

No hubo ataque o agresión alguna de parte de los jóvenes ocupantes de la camioneta contra los militares integrantes del CIAES y que los jóvenes fueron asesinados por los militares sin tener siquiera la oportunidad de defenderse. El derecho a la vida no puede ser reivindicado según el destinatario, pues su respeto debe ser absoluto. Más recriminable resulta, si ello es posible, que a la ejecución sumaria se le agregue la distorsión de la realidad con artimañas y montajes que pretenden justificar, en este caso afortunadamente en vano, el asesinato (p.123).

En este caso, el Consejo de Estado en segunda instancia confirmó parcialmente la decisión de primera instancia y ordenó el pago de perjuicios morales y materiales a favor de la compañera permanente e hijo de la víctima.

Puede observarse que en esta sentencia se amplía el espectro de reparación y se reconocen además de perjuicios inmateriales, también perjuicios materiales en favor de los familiares de la víctima.

5.1.3 Sentencia Exp. 12623 de enero 28 de 1999, Caso Beltrán Puentes:

Esta sentencia estudia el caso de la posible responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por la desaparición de Héctor Jaime Beltrán, quien se desempeñaba como mesero en la cafetería del Palacio de Justicia en la fecha que se llevó a cabo en el operativo militar con motivo de la toma de este por parte del M-19.

El análisis permitió acreditar la falla en el servicio por parte del Estado, teniendo en cuenta las fallas evidentes que se presentaron en el operativo y antes de este. Así mismo, se demostró que hubo procedimientos ilícitos frente a la recuperación de cadáveres y desaparición forzada de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia.

Esta sentencia es relevante teniendo en cuenta que se decidió modificar la sentencia de primera instancia en relación con la reparación integral del daño y ordenó medidas no pecuniarias de reparación. También, además del pago de perjuicios materiales e inmateriales, se ordenó al Estado adoptar las medidas necesarias para lograr el retorno de la persona desaparecida o sus restos mortales en caso de fallecimiento, en atención a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los que reconoció el derecho que tienen los perjudicados a saber lo ocurrido con sus familiares.

Como se observa, en los procesos de la jurisdicción contencioso administrativa sobre responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario se comienza a tener en cuenta lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a los

parámetros de la reparación integral de las víctimas. Este tema siguió teniendo acogida en el Consejo de Estado, como se logra observar a continuación.

5.1.4 Sentencia Exp. 44333 de julio 9 de 2014, Caso Vergara Villalba y otros:

Esta sentencia del Consejo de Estado se produce en razón de la masacre presentada en el corregimiento de Pichilín del municipio de Morroa (Sucre). En estos hechos se retuvieron a 14 personas y luego de amarrarlas, les dieron muerte, dicha masacre fue atribuida posteriormente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Considera el Consejo de Estado en esta sentencia lo siguiente:

La Nación-Ministerio de Defensa, Policía y Armada Nacional son responsables al estar demostrado el incumplimiento en el deber convencional, constitucional y legal de brindar seguridad y protección exigible en relación con la vida y los bienes de las víctimas. Se violaron los deberes de respeto y garantía establecidos en el artículo 1.1. De la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 1º de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y se desconocieron los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez vs. Honduras, Caso 19 comerciantes vs. Colombia, Caso Mapiripan vs. Colombia, amén de la violación palmaria del orden jurídico interno (Consejo de Estado, Sentencia Exp. 44333 de 2014).

En esta sentencia se logra observar que el Consejo de Estado realizó un control de convencionalidad en virtud de los artículos 93 y 230 de la Constitución Política. Sobre el control de convencionalidad, es preciso indicar que esto implica la realización de una confrontación normativa que le permita fallar de acuerdo a las disposiciones expuestas en el derecho internacional de los Derechos Humanos (Cubides, Martínez & Castro, 2016).

En esta sentencia el Consejo de Estado ordeno medidas de reparación, de carácter pecuniario y no pecuniario pero también reconoció perjuicios morales y materiales en favor de los demandantes. Como medidas de reparación no pecuniarias ordenó a la

Policía y la Armada Nacional la realización de una ceremonia conmemorativa en el corregimiento de Pichilín, en la que ofrezcan disculpas públicas a las víctimas y a la comunidad en general, por la responsabilidad en que incurrieron estas entidades, así como la instalación de una placa conmemorativa en el corregimiento donde se produjeron los hechos.

Sumado a lo anterior, se ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, incluir a los demandantes y a la comunidad del corregimiento de Pichilín en los programas de reparación colectiva que adelanta esa entidad, y también se ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras, para que examine la evaluación de la titulación de los predios que componen el corregimiento de Pichilín, determinen si en el mismo existe alguna anomalía relacionada con el fenómeno de despojo de tierras.

También se contempló la obligación de brindar un tratamiento psicológico y psicosocial a cada uno de los demandantes, haciendo especial énfasis en las mujeres, menores de edad y adultos de la tercera edad.

Y por último, se ordenó al Centro de Memoria Histórica, mediante su Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica así como al Archivo General de la Nación, la preservación de la presente sentencia y la custodia y conservación de su archivo, para que haga parte y fortalezca el patrimonio documental histórico de la Nación y la memoria consciente de la violencia del conflicto interno y el padecimiento de sus víctimas, reforzando así la memoria colectiva de los asociados.

Es notorio como el Consejo de Estado viene realizando un control de convencionalidad respecto del tema de reparación integral a víctimas por graves violaciones a los Derechos Humanos, cuando dicha violación es imputable al Estado, esto se materializa aún más en la sentencia de unificación que se describe a continuación.

5.1.5 Sentencia de Unificación jurisprudencial de agosto 28 de 2014, Exp. 26.251:

Esta sentencia contiene una serie de disposiciones relevantes, que confirman la adaptación en materia de reparación integral a víctimas en casos de graves violaciones

a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, teniendo en cuenta que el Consejo de Estado aquí hace unas precisiones significativas al respecto:

El control de convencionalidad es una manifestación de lo que se ha dado en denominar la constitucionalización del derecho internacional. (...) Se trata, además, de un control que está dirigido a todos los poderes públicos del Estado (...) Lo anterior indica, claramente, que el juez nacional no solo está llamado a aplicar y respetar su propio ordenamiento jurídico, sino que debe proyectarse sobre este una “interpretación convencional”, de manera tal que pueda constatar si las mismas son o no “compatibles”, o se corresponden con los mínimos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros tratados y normas de derecho internacional de los derechos humanos, y de derecho internacional humanitario (Consejo de Estado, Sentencia de unificación jurisprudencial Exp. 26.251 de 2014).

Lo anterior logra demostrar la connotación que le ha dado el Consejo de Estado a los pronunciamientos efectuados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y evidencia el esfuerzo que actualmente realizan los Consejeros de Estado por realizar un análisis de convencionalidad antes de emitir una sentencia.

Conclusiones

Frente a la pregunta de investigación planteada dentro del desarrollo del presente artículo de investigación sobre si ¿Se han acogido los criterios de derecho internacional por el Consejo de Estado de Colombia para reparar a las víctimas por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos?, se han llegado a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, es claro que el Consejo de Estado en Colombia ha acogido los criterios de reparación integral esbozados en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. En este punto es procedente indicar que se ha realizado un análisis de los compromisos adquiridos por parte del Estado frente al Sistema interamericano de derechos humanos frente a la reparación integral de víctimas y lo anterior ha sido acogido por la Corte Constitucional al momento de analizar cada caso concreto, lo cual ha permitido adoptar medidas adecuadas de reparación en cada caso.

Así mismo, se han aplicado criterios de Justicia restaurativa en donde se toman medidas de reparación NO pecuniarias. Especialmente en los casos de violación de los Derechos Humanos, sin que deba limitarse solo a estos. Sin embargo, frente a las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado sugieren una indemnización superior a los 100 SMLMV, siempre que se pruebe la mayor intensidad del daño moral, y no exceda el triple de dicho monto.

Lo anterior es una muestra de la severidad con que esta corporación castiga al Estado colombiano cuando este incumple con obligaciones adquiridas en virtud de la convencionalidad y el derecho internacional de los derechos humanos. Además, se observa que en las publicaciones realizadas en los últimos años, la preocupación del Consejo por unificar la jurisprudencia respecto de las indemnizaciones que aplican en casos de perjuicios inmateriales y graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Es claro que Colombia en la actualidad cuenta con una justicia contenciosa administrativa enmarcada dentro de las decisiones proferidas por la CIDH, de igual forma, puede indicarse que los procesos de responsabilidad extracontractual del Estado sobre regímenes de imputación subjetivo y objetivo cuentan con un desarrollo amplio, lo que deja mejor posicionada internacionalmente a la administración de justicia en este campo.

La jurisprudencia expuesta en esta investigación permite evidenciar la evolución de la sección tercera del Consejo de Estado que es la entidad a cargo de los procesos de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado haciendo un análisis minucioso de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para aplicarla en sus decisiones (Núñez & Zuluaga, 2012), lo que arroja estándares consecuentes con lo dispuesto por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto de la reparación integral a víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario por acciones u omisiones del Estado.

Así mismo, como lo indica Cubides, Martínez & Castro (2016) el Consejo de Estado, ha considerado lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de las reparaciones directas. En ese sentido, es preciso indicar que se ha incorporado el concepto del Control de Convencionalidad en Colombia, concretamente por la sección tercera del tribunal de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa.

Referencias

Aizenstatd, N., (2012). La responsabilidad internacional de los Estados por actos ilícitos, crímenes internacionales y daños transfronterizos”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol. XII. Recuperado de <http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v12/v12a1.pdf>

Agudelo, S. J. & Calderón, M. A. (2016). Responsabilidad patrimonial del Estado colombiano por actos de reforma constitucional. En Justicia, 29, 99-118. <http://dx.doi.org/10.17081/just.21.29.1236>. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/just/n29/n29a08.pdf>

Agudelo, O., & León, J. (2017). Las Hipocresías En Torno A Los Derechos Humanos. En O. Agudelo Giraldo, O. Woolcott, J. Cubides Cárdenas, 1 ed. Editorial Universidad Católica de Colombia.

Ahumada, I. (2015). Reflexiones sobre la ineficiencia del estado colombiano en la investigación de conductas contra los derechos humanos, a partir de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos. Tesis de Especialización. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad De Derecho. Especialización En Derechos Humanos Y Derecho. Bogotá: Colombia. Recuperado de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7113/1/ARTICULO%20IBETH%20T%20BIAS%20AHUMADA.pdf>

Avalos, R (2006). Responsabilidad del Estado por hecho internacionalmente ilícito del Estado. ¿Más de 40 años de labor de la Comisión de Derecho Internacional para nada? Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 6, 579-598. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/4027/402740621014.pdf>

Bruno, R. (2014). Las Medidas De Reparación En La Jurisprudencia De La Corte Interamericana De Derechos Humanos: Alcances Y Criterios Para Su Determinación (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de La Plata Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Maestría en Derechos Humanos. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/37558/Documento_completo_.pdf?sequence=3.

Cáceda, J. (2012). La responsabilidad internacional de los Estados: base para la defensa de los Derechos Humanos. *Revista De Derecho PUC*, 61(1). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5085180.pdf>

Calderón, J. (2013). *La evolución de la reparación integral en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos* (1st ed.). México, D.F.: Instituto de investigaciones jurídicas UNAM.

Chacón, N. (2015). Acatamiento de la medida de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, por parte del estado colombiano en los fallos proferidos por la corte interamericana de derechos humanos. In N. Chacón, J. Cubides, L. Díaz, A. Martínez, D. Vargas, & T. Vivas (Ed 1.), *Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos* (1ª ed., pp. 37–65). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Católica de Colombia.

Consejo de Estado. (2017). *Graves Violaciones A Los Derechos Humanos E Infracciones Al Derecho Internacional Humanitario: Jurisprudencia básica del Consejo de Estado desde 1916*. Bogotá: Ramiro Pazos & Guillermo Sánchez. Recuperado de <https://www.ramajudicial.gov.co/.../Graves+VIOLACIONES...Derechos+Humanos.../cb8...>

Consejo de Estado. (2015). *Decisiones relevantes de responsabilidad del estado sobre graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario*. Recuperado de <http://consejodeestado.gov.co/documentos%5Cpublicaciones%5CCONSOLIDADOVISITACPI.pdf>

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006). *Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C N°. 149. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_149_esp.pdf

Cuastumal, J. (2013). Casos colombianos fallados por la Corte Interamericana De Derechos Humanos, estudio a través de la teoría del derecho procesal. *Estudios De Derecho*, LXX (155). Recuperado de <https://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/red/article/download/.../16901>

Cubides, J., Martínez, A., & Castro, C. (2016). La génesis del control de convencionalidad: el ejercicio del Control de Convencionalidad Difuso (CCVD) por parte del Consejo de Estado colombiano 2006-2014. En J. Cubides (Ed.), *El Control de Convencionalidad (CCV): Fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos* (1ª Ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Católica de Colombia.

De los Reyes, W., & Botero, A. (2003). El Caso Las Palmeras. Análisis de la sentencia de excepciones preliminares y su incidencia en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. *Revista De Derecho*, 20(1). Recuperado de <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/viewArticle/2899>

Gil Botero, E. (2017). *Responsabilidad extracontractual del Estado* (7th ed.). Bogotá: Temis.

González, O. (2012). Responsabilidad extracontractual del estado. Una aproximación desde la teoría de la responsabilidad de los clásicos a su carácter de disciplina autónoma del derecho. *Revista Uis Humanidades*, 40(2). Recuperado de <http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistahumanidades/article/view/3465/4738>

Güecha, C. (2012). La falla en el servicio: una imputación tradicional de responsabilidad del estado. *Prolegómenos*, 15(29), 95-109. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4278453.pdf>

Jiménez, D. M. (2016). Responsabilidad del Estado; títulos de imputación objetiva por daño especial y riesgo excepcional en el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado año 2013-2016. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14200>

Mejía, J. (2007). Derechos Humanos, conflicto armado y agresión terrorista en Colombia. *Prolegómenos. Derechos y Valores*, X (19), 51-88. Recuperado de <http://www.redalyc.org/html/876/87601904/>

Moyano, C., & Ortiz, L. (1994). *La deuda externa y la responsabilidad internacional del Estado* (1st ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Molina Betancur, C. (2015). La responsabilidad extra-contractual del Estado por error judicial en Colombia. *Opinión Jurídica*, 3(6). Recuperado de <https://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/1313/1301>

Nader Orfale, R. (2016). Evolución jurídica de la responsabilidad extracontractual del estado en Colombia. *Advocatus*, (especial No. 15: 55 - 71), 56. Recuperado de <http://www.unilibrebaq.edu.co/unilibrebaq/revistas2/index.php/advocatus/article/download/51/45+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=co>

Núñez, R., & Zuluaga, L. (2012). Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos humanos: principios de implementación en el derecho colombiano. *Revista Análisis Internacional*, 6(1). Recuperado de <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/853>

Ramírez, G. (2017). Los derechos humanos a debate. Perspectivas desde el derecho internacional (1st ed.). Bogotá: Editorial Universidad Católica de Colombia.

Rousset, A. (2011). El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Revista Internacional De Derechos Humanos*, 1(1). Recuperado de <http://www.cladh.org/wp-content/uploads/2012/07/a1-n1-2011-art03.pdf>

Ruiz Orejuela, W. (2016). Responsabilidad del Estado y sus regímenes (3a. ed.) (1st ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones.

Sferrazza, P. (2017). Hecho ilícito internacional= International Wrongful Act. *EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad*, 13, 271-282. Recuperado de <https://e-revistas.uc3m.es/index.php/EUNOM/article/download/3823/2400>

Tarazona, C. (2016). Daño a la vida de relación como perjuicio autónomo y el daño a la salud. *Revista Inciso*, 18(2). Recuperado de <http://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/633/996>

Torres Ávila, D. Reyes García, J. León Molina, & C. Castro Buitrago (Eds.), *Análisis y aplicación de los derechos humanos en el contexto de la Corte Interamericana* (1ª ed.). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Católica de Colombia.

Trujillo, E. (2014). EL PLAZO RAZONABLE. “Análisis interpretativo del criterio usado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Valle Jaramillo vs. Colombia. Una Voz Pro Persona, 1(2). Recuperado de <https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/123456789/36386/vozppn2p40.pdf;jsessionid=8E325BF7BB6D203301156DE263AE4AE2?sequence=1>

Vivas, T. & Toro, E. (2016). Análisis de caso: estudio sobre el cumplimiento de la sentencia masacre de Mapiripan contra Colombia. Revista Prolegómenos Derechos y Valores, 19, 37, 37-56. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/prole/v19n37/v19n37a03.pdf>

Jurisprudencia

Consejo de Estado de Colombia. (1992). Sentencia Exp. 6986 de junio 5. C.P Carlos Betancur Jaramillo.

Consejo de Estado de Colombia. (1997). Sentencia Exp. 10138 de abril 10. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

Consejo de Estado de Colombia. (1999). Sentencia Exp. 12623 de enero 28. C.P. Ricardo Hoyos Duque.

Consejo de Estado de Colombia. (2014). Sentencia Exp. 44333 de julio 9. C.P. Enrique Gil Botero.

Consejo de Estado de Colombia. (2014). Sentencia de unificación jurisprudencial Exp. 26251 de agosto 28 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Corte Constitucional de Colombia. (1996) Sentencia C-333 de agosto 1. M.P Alejandro Martínez Caballero.

Corte Constitucional de Colombia. (2003) Sentencia C-067 de febrero 4. M.P Marco Gerardo Monroy Cabra.